

ANEXO I

Ana C. Núñez

Cabe aclarar que los datos empíricos y los avances teóricos que no están desarrollados en el informe final se emplearán para en la etapa de formación doctoral en la que se trabajará la dimensión social del trabajo en circuitos económicos asociados al paso de mercaderías en la frontera con Paraguay y Brasil, relaciones sociales, trayectorias y organización de los trabajadores que están radicados en el área de estudio: asentamiento Dos Mil Hectáreas.

Diferenciarse de los ocupantes: un trabajo para “expertos”

La pérdida paulatina del sentido de comunidad refuerza y actualiza estrategias de distanciamiento con esos *otros* de los que se pretende diferenciarse partiendo de la jerarquización de lugares dentro de la ciudad que disponen, en consecuencia, un *nuevo orden espacial* (Wacquant; 2001:179). En el caso de los ocupantes/moradores de las *Dos Mil*, el recurrente sometimiento a percepciones negativas y despreciativas impactó en el debilitamiento de solidaridades internas y alimentó la actual relegación del asentamiento, espacio convertido en arena de conflictos que, visto de esa manera, resulta funcional al colectivo mayor que piensa de ellos “lo peor”.

Precisamente, fue la retórica de los movimientos ambientalistas que impregnó con fuerza descomunal las valoraciones sociales que luego circularon de forma hegemónica sobre los ocupantes de las Dos Mil Ha. Según ellos, la amenaza ambiental contra el recurso público encuentra responsabilidad directa en la *acción antrópica* ejercida sobre el entorno natural. Notoriamente apoyados en un *“diagnóstico eficiente y ascético de los posibles daños que sufre el ecosistema frente a la proximidad de poblaciones tales que, desde su punto de vista, tienden a crecer de forma exorbitante”* (Carman; 2011:08). De fondo, existe una intencionalidad de imponer un dictamen de valor al recurso de acuerdo al lugar social que se confiere a la voz profesional. En tal sentido, rápidamente cobra notoriedad -como si fueran una gran caja de resonancia- a través de maquinaria cultural de los medios de comunicación que imponen una lectura sectorizada y “masiva” construyendo un “problema” en los términos que fueron formulados inicialmente por los *expertos*.

Resulta paradójico que el discurso conservacionista “reside en la imagen proyectada de un mundo que es compartido por todos los organismos, pero en el cuál la jerarquía de valores, las formas aceptables de la supervivencia de las especies y de explotación de los recursos están motivadas por los intereses de ciertos grupos humanos (Köhler 2000: 70 y Milton 2000). La biodiversidad suele ser asumida como un bien sin impurezas (Hames 2007), cuando en rigor no solo estamos ante un argumento incontestable esgrimido por voces autorizadas, sino además ante un artefacto cultural” (Carman; 2011:08).

Por un lado, desde una óptica nutrida de juridicidad, el “daño ambiental” es una problemática generada por los moradores o “intrusos” y, por efecto, los culpables del “delito”. Por otro, el “sufrimiento ambiental” es un fenómeno que reposiciona a los ocupantes en el lugar de “víctimas” de las consecuencias tanto de acciones como así de omisiones de las políticas encaradas por el gobierno e institucionalidad locales. Estos mecanismos se articulan como factores que desde la defensa de intereses propios les asigna nuevos atributos identitarios pero insuficientes para justificar que el usufructo de las tierras recaiga en los actuales ocupantes.

Presentarse ante la sociedad mayor como “víctimas” de un sistema perverso que los “utiliza” constituye un dispositivo de *exoneración social* que les sirve a los ocupantes para reposicionarse y poner en discusión un problema de raíz estructural: el derecho a que se les garantice condiciones de salubridad ambiental en áreas que son de uso habitacional.

De las estrategias empleadas para la ocupación la *Asociación de Trabajadores del Estado* (ATE) alentó la ocupación de terrenos adyacentes a la línea de alta tensión de la empresa que suministra energía en la provincia *Electricidad de Misiones Sociedad Anónima* (EMSA), argumentando que quisieron “evitar problemas de salud a futuro” que se producirían por las irradiaciones del tendido eléctrico sobre la población localizada debajo los cables¹.

¹ Un informante calificado fue categórico al afirmar que la empresa EMSA autorizó el emplazamiento de casillas debajo del tendido eléctrico porque les resultaba conveniente el trabajo de limpieza que las familias harían con lo que se evitaban gastar dinero y esfuerzos adicionales: “Ahora, vos analizá ¿porqué le daban eso? Primero, porque en esos 50 metros que vos tenés debajo de la línea trifásica, los rayos que produce te produce cáncer y, segundo, que ellos (EMSA) necesitaban tener limpio esa franja porque sino los árboles le hacían tocar los cables. ... le dieron 50 metros para plantar a la gente y agarrá la que vos quieras para plantar mandioca, lo que vos quieras. De esa manera, se mantenía limpio abajo y ellos no ocupaban mano de obra y, si le agarraba cáncer a alguno de los que están abajo de la línea eléctrica, problema de ellos, porque ellos se lavaban las manos de todo, de esa manera, se mantenía como esclavos a la gente ahí abajo con toda esa radiación. Nosotros qué hicimos, decirle a esa gente: salgan de abajo del tendido eléctrico, avancen para los costados, ¿entendés?”.

Construcción de la memoria y de la legitimidad

El lugar del *estigma* sirvió como estrategia de los ocupantes/moradores para construirse como víctimas instrumentados en repertorios en circulación elaborados por ellos mismos para promoverse como pobladores legítimos ante el resto de la ciudadanía. Operaron en esta 'arquitectura' imágenes, escenas y fechas proveídas por los habitantes con mayor antigüedad en el lugar como mecanismo en el "recuperan un espacio de disputa y contestación" (Carman; 2011: 13). Las diferentes interlocuciones y los textos que circularon permitieron que se tornen visibles socialmente. En un ciclo incesante de puestas en escena los mismos ocupantes se apropiaron y reprodujeron lenguajes atestados de tecnicismos ambientales, judiciales, médicos y políticos.

Estos discursos no sólo fueron usados para justificar la moradía, en muchos casos, se usaron para impedir y censurar el asiento de nuevos pobladores en el sitio. Al respecto Carman (2011:17) nos ayuda a explicar el complejo rango de tolerancia social que oscila entre aceptar y negar la *legitimidad de la moradía* en asentamientos irregulares. Advierte sobre el principio de "*máxima de intrusión socialmente aceptable*" está presente en las disputas desencadenados por los usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano fundadas, en gran medida, en el *lugar común* -en términos socio-espaciales- que se les asigna a priori a los sectores populares por su condición de *desclasados*², de *infra-ciudadanos*³.

De esta manera, las organizaciones sociales (*ACTRI*, *Pastoral Social* y en menor medida *CTA*) como actores que canalizaron la demanda de los pobladores, impulsaron el desarrollo territorial construyendo parte de la ciudad que, según ellos, les fue y es negada. En ese plano, el fenómeno de apropiación espacial los responsabiliza de esa ciudad real: la que viven, sienten, transitan, producen y reproducen los pobladores/ ocupantes/ moradores de las "Dos Mil". Sin embargo, ese territorio también es "deseable" por sus atributos naturales se constituye en un potencial para beneficiar al conjunto social, sobre la base de la coexistencia armónica de distintas especies (flora, fauna, recursos naturales: tierra y agua) con los grupos humanos asentados.

² Ver Carman (2006 y 2011).

³ Esta categoría entra en conexidad con la lógica imperante de las políticas públicas neoliberales que disponen "medidas ejemplificadoras" excluyendo intencionalmente a través de la omisión u "olvido", las demandas sociales que pretenden atender necesidades básicas de sectores populares. Estos, devenidos en usuarios no autorizados del espacio urbano, se convierten en base social de competencias por el disfrute de territorios que están altamente valuados por las esferas estatal y mercantil y, por ello, objeto de su deseo y disputa.

En otro sentido, el espacio representado fue para muchos consecuente de luchas por la autogeneración de soluciones a demandas sociales concretas respaldadas en la participación comunitaria con objeto de inclusión en el colectivo social. Las incursiones y transformaciones del medio físico confluyeron en la construcción de identidades ancladas en el *espacio usado*⁴ evidenciables en su particular *configuración territorial* (Santos, 1991; Coraggio, 1987).⁵

Por su parte el Estado, desde la formulación de planes de “reordenamiento” diseñó la moralidad legal (“deber ser”) por la que deberían regirse los usos, actividades y usufructos de la tierra y los recursos contenidos en ella. Concibió una suerte de proceso ‘civilizatorio’ cuya línea del tiempo fue del “caos” a un supuesto “orden” (futuro) “posible, urgente y necesario” interpelando al ciudadano común (sea ocupante o no) a encolumnarse detrás de aquel proyecto. Sin embargo, sus detractores cayeron bajo la lupa de sectores sociales dominantes que les asignaron rótulos identificatorios que operaron de fondo, como categorías estigmatizantes: “intrusos”, “delincuentes”, “usurpadores”, “especuladores”, etc.

En condiciones de relegación social fueron distintas las formas de respuesta colectiva que emergieron para rebatir la situación marginal de los ocupantes y repensar las concepciones y expresiones tradicionales de *ciudadanía*. No obstante, la posición liminal de los llamados “infraciudadanos”, las organizaciones fueron capaces de crear nuevas identificaciones para confrontar o evadir categorías sociales ignominiosas. A partir del reconocimiento de la propia posición en campo las tácticas fueron reorientadas a modificar la brecha estigmatizante (Goffman, 1989) entre esos “ellos” y esos “nosotros”, articulados en torno de relaciones de poder a la manera de *establecidos* y *outsiders* (Elías y Scotson, 2000).

Disputar la *ciudadanía* conquistada se constituyó en una panacea de los que quedaban fuera del esquema normativo-moral de la mayoría silenciosa, obediente y *propietaria*. Esa la ‘minoría revoltosa’ de los “ocupantes”, los “intrusos”, los “delincuentes” y los “usurpadores”, todos excluidos de la condición de propietarios de las tierras tomadas, tuvieron ante sí el desafío de accionar otros tipos de ciudadanía individual y colectiva.

⁴ Para Milton Santos (1991) el *espacio usado* es un “conjunto indisoluble solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones”.

⁵ Ambos autores coinciden en la configuración espacial se sostiene o apoya en un proceso social que permite su conservación producto de actividades voluntarias y conscientes de comunidades orientadas a cumplir con

El desafío de construirse como ocupantes legítimos

El caso de estos productores no se asemeja a las condiciones en que se encuentran pequeños y medianos productores que conforman la masa del campesinado misionero, tradicionalmente impulsado a ganar espacio a la frontera agraria en transformación (colonización) y que, a consecuencia de la crisis que afectó los productos tradicionales en los años '70 hasta los '90, se vio desplazado del modelo. En este esquema económico, el sector de minifundios dedicados a la explotación de yerba mate, tabaco y té, se enfrentó al deterioro del modelo productivo y, de esta manera, los productores quedaron inmersos en la disputa por las cada vez más escasas tierras para producir y ahora altamente valorizadas por la actividad forestal en ascenso. Como consecuencia, se produjo paulatinamente el desplazamiento forzoso de la producción diversificada al monocultivo dependiente de latifundios explotadores de madera.

La provincia de Misiones, con una superficie total de 29.801 km² y límites internacionales que abarcan un 90 %, se convierte en un lugar geopolíticamente de trascendencia dentro del mapa de comercialización de productos a nivel regional. Con estos factores en juego, adaptar recursos, saberes y técnicas a un nuevo paradigma de desarrollo económico global se instituyó como fundamento principal del discurso de los proyectos que fueron confluyendo en las *Dos Mil*. Como si fuera un espacio 'vacío, concentró el interés de sectores en pugna por el manejo de los recursos naturales y localización estratégica de las tierras. Como aspiración promovida por la Diócesis local desde sus inicios, la Feria Franca de Puerto Iguazú apuntó a replicar el modelo de producción orgánica, venta directa y al menudeo, del productor al consumidor final –sin realizar 'reventa' de productos no producidos por ellos- siguiendo los criterios en que se encuadraron inicialmente las Ferias Francas en todo el territorio provincial. Los responsables del seguimiento del grupo de productores “*San Benito*” pusieron en práctica talleres de *Educación Popular*⁶ para transferir conocimientos técnico-productivos.

⁶ La escuela de Paulo Freyre fue retomada por las organizaciones de apoyo a la formación de ferias fruti-hortícolas empleando el modelo de educación popular donde se supone que el conocimiento se construyen en la relación social –que es siempre horizontal, igualitaria y dialéctica- entre quien enseña y quien aprende.

La participación semanal en los encuentros de acompañamiento promovió la inserción paulatina de los miembros del grupo en un modelo democrático o de “vida plena”⁷ (“Valores del Reino de Dios”) antagónico al de “dominación u opresión” (“Proyecto de Muerte u opresión sin Valores”). Los atributos de uno y otro representaban la cosmovisión de la Iglesia Católica que inducía la adopción de la doctrina desde la aceptación del sentido de ‘comunidad’ que se les proponía.

A cargo de técnicos capacitadores de Cáritas Dioscesana, centró el debate en el cuidado del ambiente, en formas alternativas de aprovechamiento los recursos hídricos superficiales (vertientes y recuperación de agua de lluvia) y de preservación del suelo. No obstante los esfuerzos fueron muchas las dificultades con que se enfrentaron en la etapa de conformación del grupo. En primer lugar, les resultó apremiante la falta de agua para riego y servicio de luz eléctrica en sus predios, un tema de suma preocupación que todavía se obtuvo respuesta. En segundo lugar, la exigencia de calidad productiva y de comercialización –basada en el paradigma de la producción orgánica o paradigma “agro-ecológico”- inquietó a los ocupantes debido a las frágiles condiciones en que les toca desarrollar la actividad agrícola, obstáculos que, en la medida que no los solucionen, les impediría garantizar una producción continua, poniendo en riesgo el proyecto de Feria Franca.

El énfasis puesto en la performance productiva y grupal se logró en detrimento de la capacidad de asumirse como sujetos políticos. Fue llamativa la forma en que se evitó discutir e incluso analizar sobre la ocupación de las Dos Mil ha. Era un tema vedado la organización política y, sobre todo, las reyertas pasadas entre *ACTRI* y el resto de las organizaciones de la zona de chacras. Teniendo en cuenta que muchos de los feriantes tuvieron relación directa o indirecta con la organización, en reiteradas oportunidades, el capacitador se vio obligado a reconducir las charlas pues consideraba que “lo importante es lo que viene, no lo que pasó”.

Otro de los problemas era garantizar el flujo de recursos para sostener en el tiempo procesos productivos que excedan la mera subsistencia. La brecha entre los que tenían otros ingresos adicionales a la chacra y los que no estableció una fuerte

⁷ Los modelos mencionados aparecen como metáforas explicativas que los técnicos del área social de la Pastoral Social emplearon para hacer comprensible el antagonismo existente entre el paradigma neoliberal-racionalista y el humanista-cristiano.

diferenciación interna aun siendo, todos ellos y en simultáneo “ocupantes irregulares” (sin propiedad ni adjudicación por ahora) y productores *rur-urbanos* o *periurbanos*⁸.

El despliegue de capitales diferenciales dispuso a sus miembros en una especie de ‘juego’ de sobrevivencia, en el que el más fuerte era quien podía demostrar su capacidad de ‘aguante’ a lo largo del proceso de consolidación del grupo.

Entendemos que el carácter de estas “tecnologías organizativas” apunta a garantizar la calidad productiva conformando *grupos operativos*. El asociacionismo con fines productivos requiere voluntad de agrupamiento y orientadores/animadores que conduzcan a construir objetivos, sentido y misión del grupo. En el caso de San Benito se sucedieron 3 etapas: 1. Relacionamiento unidireccional (el intercambio interpersonal era escaso y los miembros se realizaban planteos siempre mediados por el técnico y, los requerimientos se pronunciaban en forma individual). 2. Objetivo objetivado y; 3. Construcción del ‘nosotros’ (identificación de necesidades comunes y búsqueda colaborativa de alternativas para la solución de situaciones-problema u obstáculos detectados, haciendo énfasis en la dinamización de los valores solidarios).

Construcción del pequeño productor rural: de ocupantes a feriantes

Convertir a sujetos que son “ocupantes de tierra” en “pequeños productores rurales” implicó un arduo trabajo de construcción simbólica en el cual resultó determinante el accionar de los agentes de desarrollo rural de la Pastoral Social de la Diócesis de Iguazú. Introducirlos en una lógica asociativa implicó para los técnicos la transferencia de las propias representaciones sobre la agricultura familiar apoyada en la necesidad manifiesta de los ocupantes de resolver el problema de la subsistencia -al menos parcialmente- y de legitimar la tenencia de las tierras que son propiedad del municipio.

8 La diferenciación taxativa entre “campo” y “ciudad” establece una interfase en sí misma aún es tema de debate para los investigadores y especialistas, sin embargo, una aproximación conceptual hacia a de estos nuevos/viejos espacios intersticiales (tengamos en cuenta que desde la antigua ciudad romana los bordes urbanos constituían áreas de producción no-urbanas) recae en 4 aspectos identificados por Barski en torno de la definición del periurbano productivo: “1). Se trata de un territorio en consolidación, bastante inestable en cuanto a la constitución de redes sociales, de una gran heterogeneidad en los usos del suelo (2). Ha recibido diversas denominaciones: la periferia urbana, el rur-urbano, la “ciudad difusa”, la frontera campo-ciudad, la “ciudad dispersa”, territorios de borde, borde urbano/periurbano, el contorno de la ciudad, extrarradio, exurbia, etc. (3). Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad (4)”. (Barski; 2005:02). Los cinturones productivos (principalmente hortícolas) en las periferias citadinas fueron la primera manifestación de la actividad en Argentina finalizando el siglo XIX. Con la profundización de sistema económico capitalista y el crecimiento del mercado interno a lo largo del siglo XX, se fueron dando una serie de relocalizaciones de los cultivos hortícolas a nivel nacional, este fenómeno ha sido estudiado por diversos grupos de investigación cuyos aportes al campo quedaron registrados, por ejemplo, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) a partir de estudios desarrollados en la pasada década del '80.

Es así que con el pretexto de ‘aliviar’ la acuciante situación económica de los pobladores de las *Dos Mil hectáreas rural* el 31 de diciembre de 2006 se inauguró la *Feria Franca* y en 2008 ya funcionaba plenamente.⁹

La política de desarrollo rural en la provincia de Misiones vigente desde la década de 1990 consolidó vías alternativas de producción en defensa de la agricultura a pequeña escala. En la misma se integraron organizaciones no gubernamentales, sindicatos y agencias especializadas en la ejecución de programas de asistencia productiva acorde a la lógica de *políticas sociales compensatorias*¹⁰ desde la órbita estatal, propias de la *época*¹¹. El aspecto central fueron las *representaciones campesinistas* de actores en situación de marginalidad que empezaron a circular respecto de los sectores dominantes. Empezó a difundirse la categoría *campesino* que reunía para los pequeños agricultores 3 atributos que fueron tomados como bandera: *autonomía*, *saberes tradicionales* y *diversificación productiva*. El paradigma de la *agroecología* constituyó por entonces una opción insustituible para la agricultura familiar al punto que técnicos y profesionales afines al PSA conformaron la *Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM)*¹² (Schiavoni; 2006:02). Se destacó el trabajo simbólico desarrollado por las agencias a través de materiales de divulgación con carácter de documentos de formación agroecológica.

En el caso de los feriantes de “San Benito” lo que los impulsó a incorporarse a la actividad productiva fue el hecho de visualizar la Feria como posibilidad firme de acceder a un mejor estándar de vida y, en algunos, de ‘recuperar’ la adscripción al mundo rural. No obstante las distintas motivaciones individuales, a nivel colectivo representaban una forma de “dignificar” su morada y poder ser reconocidos como “ciudadanos de derecho”.

Como parte de las actividades complementarias a las capacitaciones técnico-productivas, el grupo se sumó a la “Escuela de Ciudadanía” (2006) espacio

9 Desde febrero de 2008 la Feria habilitada totalmente con 60 productores entre permanentes e invitados, trasladándose al predio ubicado cerca del barrio de IPRODHA “300 viviendas Ignacio Abiarú” y contiguo a la Comisaría de la Mujer, por la avenida Halcón. La constitución de este grupo de pequeños productores se produjo a lo largo de casi 3 años de trabajo entre la comunidad de ocupantes y el Área Trabajo de Cáritas Diocesana, sede Eldorado.

10 Programa Social Agropecuario, 1993; Pro-huerta, 1994, y proyectos de la Unidad de Minifundio de INTA (Schiavoni; 2006:02)

11 Desde mediados de la década de 1990 y principios de los años 2000 en Argentina se cuenta con una prolífica producción teórica respecto del carácter de las políticas sociales y los efectos de los programas de ajuste económico de mano de Estela Grassi (UBA), Susana Hintze (UNGS) y más recientemente María S. Svampa (Conicet-UNLP) que también recorrió la irrupción de nuevos problemas generados por la extracción de recursos naturales, especialmente la megaminería, bajo el signo del neoliberalismo.

¹² Es importante mencionar que uno de los miembros fundadores fue el ex director de *Desarrollo Agrícola* del gobierno de la provincia.

privilegiado de la Pastoral Social para encarar la formación cívica y política de sus feligreses, en un contexto de descontento social generalizado¹³. La formación ciudadana se llevó a cabo mediante talleres semanales sobre temas legales y sociales (mecanismos democráticos de participación, organización comunitaria y tenencia de la tierra) dictados por técnicos de la Pastoral Social y abiertos a los pequeños productores y vecinos en general.

Los agentes de desarrollo y los espacios tutelados

La construcción de ciudadanía fue de relativa autonomía porque los sujetos estuvieron siempre sumidos en una relación que, en cierta forma, implicó contención pero también sujeción y dependencia. El vínculo entre Cáritas y los ocupantes supuso una especie de 'clientelismo religioso' pues la primera ofició de intérprete de la realidad local irrumpiendo en escena como un actor de suma trascendencia:

(...) ellos vinieron, o sea, G. y D. M., G. Pastoral y D. M. Cáritas...nos proponen eso: qué posibilidad había de unir, juntar 15-20 familias para poder capacitarlos y hay posibles ayudas, subsidios, lo que sea, para beneficiar familias...ayudar en la producción, en todo. Y, sí, le dije, yo no tengo problema, y "cuanto tenés? Me dijeron, 10 familias más o menos vos me llamas, me avisás"¹⁴.

El sistema productivo y de comercialización puso énfasis en la calidad de los productos desde una fuerte identificación institucional y moral de los feriantes con la Fe católica. Desde su óptica la Iglesia al acompañar a grupos de base, fue imponiéndoles el ideal moral de 'sacrificio', 'trabajo mancomunado' y 'desinteresado' orientada a transformar a las personas que, hasta entonces, estaban atravesadas por el individualismo y la racionalidad economicista (homo economicus) conductas que se asociaron al sistema capitalista.

¹³ La Escuela de Ciudadanía fue un espacio de formación que continuó tras la crisis institucional protagonizada a comienzos de 2006. Por esos días se produjo un hecho que conmocionó a la opinión pública de Puerto Iguazú: el cuantioso desfalco en el que se vieron involucrados el Municipio y altos funcionarios entre ellos el Intendente Claudio Filippa, el Secretario de Hacienda, Ramón Bonifacio González y el Secretario Privado del Jefe Comunal, Roberto Pereira. El detonante fue el repentino cese de funcionamiento de 11 comedores tras una serie de irregularidades en el manejo de fondos municipales por unos 2 millones de pesos. Debido al vaciamiento de fondos, se produjo un 'rebote en cadena' de cheques emitidos por la Municipalidad lo que generó la constitución de las llamadas "Asambleas Ciudadanas" en medio de una fuerte crisis institucional en el que se intentó -sin éxito- obtener la revocatoria de mandato del Intendente. Una de las organizaciones que alentó y sostuvo la gesta ciudadana fue la Pastoral Social con sede en la oficina de Cáritas Dioscesana en la ciudad de Eldorado, Misiones.

¹⁴ Ocupante, productora de la Feria Franca, entrevista mayo de 2008.

Alentados por la aparente posibilidad de acortar la brecha social entre ‘ricos’ y ‘pobres’ cobró importancia la vinculación estratégica con la Iglesia Católica que, encargados de administrar proyectos de *desarrollo humano*¹⁵, promovieron las iniciativas subsidiadas por organizaciones internacionales de filantropía para asistencia técnico-financiera¹⁶. Los recursos destinados a la provisión de herramientas, insumos y capacitaciones incidieron con el tiempo en la dinámica interna de las comunidades beneficiadas que, a pesar de verse favorecidas con la mejora de sus condiciones de vida, no pudo lograr su *re-afiliación* al conjunto social. Paradójicamente los proyectos sociales de esta naturaleza son por definición “asistencialistas” y con expectativas de relativo éxito a corto plazo.

Organizaciones se enfrentan por la hegemonía en la lucha por las tierras

Los ocupantes de la zona rural de las Dos mil hectáreas se pugnan por el poder en el predio aún no mensurado. Desde una de las organizaciones “Asociación Mbocaí” manifestaron que el presidente de su par opositor la “ACTRI” estaría planeando cercar el para identificar quienes ingresen o circulen por el sitio. D.V. el secretario de la Asociación Mbocaí aseveró a un medio local que *“quieren poner un portón que no va a entrar gente que no sea del Actri. ¿La policía le va a pedir permiso al señor Rodríguez para entrar a las 2000 hectáreas?”*¹⁷. Esta organización se formó en diciembre del año 2010 cuenta con personería y actualmente tiene alrededor de 306 afiliados, todos ocupantes en situación irregular de tenencia de la tierra, para sostener la brecha que los diferencia en cuanto prácticas políticas nos reveló que: *“No cobramos la cuota a la gente ni le pedimos plata, comenzamos con 76 socios y hoy son 362, pero no estamos buscando socios sino gente que quiere trabajar”*. Por otra parte, la falta de luz eléctrica en el lugar llevó a que cada comprara su propio transformador, siendo los que están en funcionamiento dado que la empresa EMSA no les habilita las conexiones y asegura no contar con tales dispositivos. Una de las consignas de la agrupación es obtener energía eléctrica para mejorar la calidad de habitabilidad con que se encuentran en sus parcelas.

15 Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) restituye a la centralidad del desarrollo al ámbito social encarando el fortalecimiento de potencialidades humanas para el disfrute y el bienestar social. Para ampliar consultar el “Informe Anual sobre Desarrollo Humano”, PNUD.

16 La organización italiana Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) financió en 2006 la compra de pequeñas maquinarias agrícolas para ser entregadas en comodato al grupo de feriantes San Benito.

17 Nota Diario digital “Radio Cataratas”. http://www.radiocataratas.com/noticia_13788.htm. Visto 07/10/2011.

Asimismo es materia de debate constante entre ellos el hecho de que ningún ocupante de la zona rural tiene regularizada la situación dominial por lo cual ellos presentaron hace unos meses un proyecto de mensura en el Concejo Deliberante a efectos de acelerar las tareas por parte del municipio.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil de Trabajadores Rurales de Iguazú (ACTRI) MI R., afirmó que *“yo siempre me manejé por asamblea, no hubo nada de autoritario. Fui electo en dos asambleas, una impugna que luego fue revalidada. Nosotros hacemos el proyecto de Guardiola”*.

...Productor de porcinos y aves de corral, el presidente de la Asociación Mbocaí relató los motivos de la disidencia de ACTRI y el porqué del nuevo nucleamiento: *“todos los productores de las 2000 hectáreas son gente que quiere realizar una producción que crezca cada día así ... formábamos el Atri, así que los miembros lucharon durante muchos años y nunca se pudo lograr nada por medio de ella, la gente se cansó de esto, nunca funcionó como debe funcionar, entonces, decidí abrirme junto a todas estas personas y conformar una nueva asociación”*, agregó.

Participaron en las reuniones del HCD para la aprobación de la construcción del nuevo edificio de la escuela, *“cuando estaba en el Atri, lo que queríamos y de hecho hicimos fue presentar una nota firmada por los casi 200 padres de los alumnos y vecinos de que la escuela se construya en ese terreno y no en donde nos habían establecido otras personas desde afuera, esa nota se mandó al gobernador, se presentó en el concejo, en todos lados, ningún padre ni vecino quería que se cambiara la escuela de lugar, por eso ahora estamos muy contentos”*, agregó el dirigente, además, sostuvo sin tapujos que *“el Atri está siendo procesado en un juicio por los dueños de la tierra y toda esta problemática que nos lleva a alejarnos hoy, éramos pocos realmente los que gestionábamos por la gente cosas y por esa confianza de la gente, hoy están en esta nueva Asociación”*¹⁸.

Usos de la formalidad jurídica en la construcción de la legitimidad política

Según Bourdieu (En: Bourdieu y Teubner, 2000:72) el fenómeno de *apriorización*, ligado al uso de enunciados jurídicos que se construyen con la intención de crear un

¹⁸ Nota Diario digital “La Voz de Cataratas”. http://www.lavozdecataratas.com/noticia_24996.html. Visto 17/05/2011

efecto de universalización, y un efecto de neutralización del lenguaje jurídico. Es así que en apariencia queda vaciado de contenidos políticos o éticos, surgiendo como una forma neutra y universalizable en primera instancia por la propia construcción del razonamiento, en ese rumbo, sostiene Bourdieu, se manifiesta el dominio cultural como expresión del dominio de las formas del campo jurídico. Dicho esto, se entiende que la disputa por la hegemonía de representación de los sectores sociales asentados en la zona rural apelen recurrentemente a la condición de legalidad adquirida en instancias de consagración democrática de sus funciones, obtenida en actividades asamblearias de las organizaciones de pertenencia. Por un lado, destacar los atributos de liderazgos emergentes de procesos cívicos formales -y legales- se constituye entonces en la fórmula con la cual desequilibrar los cimientos (plataformas electorales) de los adversarios en tanto candidatos a ocupar sitials jerárquicos y ejercer el poder de representación colectiva. Por otro, sembrar sospecha sobre las prácticas, mecanismos e intereses no manifiestos u ocultos de los contendientes, se asumen como sintomatología de procedimientos viciados de ilegalidad que, a la luz de sus pretensiones políticas, se circunscriben exclusivamente a la 'inapropiada' conducta desarrollada en el marco de actuaciones vinculadas a la dinámica comunitaria organizada bajo estructuras formalizadas: asociaciones de moradores y productores que ocupan las tierras. Consecuentemente, reducir la evaluación del desempeño ético-político de sus líderes desligado de otras facetas de la vida social, significa cercenar los alcances de la "cosa juzgada". Esto significa desvincular las prácticas de los sujetos posiblemente "ilegales" o cívicamente inappropriateos que, paradójicamente, son constitutivas y fundantes de las disputas de base.